EXPEDIENTE No.: ****
QUEJOSA: Q1
AGRAVIADO: V1
RESOLUCIÓN: RECOMENDACIÓN No.
10/2010
AUTORIDAD
DESTINATARIA: PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO

Culiacán Rosales, Sin., a 23 de abril de 2010

LIC. ALFREDO HIGUERA BERNAL,
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º; 2º; 3º; 4º Bis y 77 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1º; 2º; 7º, fracciones I, II y III; 16, fracción IX; 28; 55; 57; 58; 59 y 61 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, así como 1º; 4º; 77, párrafo cuarto; 94; 95; 96; 97 y 100 de su Reglamento Interior, ha examinado los elementos contenidos en el expediente ****, relacionados con el caso de la señora Q1, y vistos los siguientes:

I. HECHOS

A. Refiere la quejosa Q1 que su esposo V1 el día lunes 13 de julio de 2009 como a las 20:30 horas, fue interceptado por varios sujetos desconocidos que viajaban en una camioneta **** y un automóvil de color blanco; lo esposaron y subieron a la camioneta **** así como a los cuatro jóvenes que lo acompañaban.

A bordo de ese vehículo lo trasladaron a un lugar desconocido, hasta llegar a un edificio o casa, donde lo introdujeron sentándolo esposado con las manos hacia atrás, fue cuando supo que eran elementos de la Unidad Modelo de Investigación Policial (UMIP), ya que le empezaron a preguntar por la muerte de un chofer de camiones de la ruta “****”.

De pronto le quitaron las esposas, le colocaron unas vendas en las muñecas atándolas por atrás con cintas de plástico, en eso le dieron una patada en el pecho que lo lanzó hacia atrás cayendo de espalda, uno de estos sujetos se le subió en las piernas, entre otros dos lo sujetaron de los brazos y otro de la cabeza con sus rodillas, le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza y otra

cosa que no supo qué era pero que con ella le presionaban en la boca y nariz, de una forma que impedían su respiración y durante esa acción le pegaban para que confesara lo de la muerte del camionero.

Así realizaban esa maniobra tapándole la boca y nariz hasta que casi desmayaba por la falta de respiración, hasta por tres ocasiones, siendo en la última ocasión en que logró zafarse las manos, por instinto se quitó la bolsa de la cabeza, en ese momento alguien más lo jaló el brazo derecho hacia atrás con tal fuerza haciendo palanca con su pie que le tronó sintiendo un dolor muy fuerte insoportable, dándose cuenta que su brazo derecho estaba zafado, pero esto no importaba a los agentes pues de pronto uno de ellos gritó que trajeran las esposas poniéndole los brazos hacia atrás, lo cual aumentó su dolor.

Pasaba el tiempo, su dolor en el brazo era insoportable pidiéndoles de favor que le quitaran las esposas, hasta que uno de ellos se acercó a él diciéndole “ya mariquita”, “ya estuvo bueno de llorar” y de forma violenta le quitó las esposas causándole un gran dolor.

Al tiempo realizó una maniobra sobre su hombro jalándoselo hacía abajo y se lo regresó a su lugar, ya que le había quedado hacia atrás por lo que el dolor siguió en aumento.

Ya sin esposas refiere que lo envolvieron en una cobija o cobertor lanzándolo hacía atrás, que le dieron patadas y golpes por todo su cuerpo por espacio de 15 minutos, le dijeron que se iba a morir, gritándoles que ya no lo golpearan pues no soportaba el dolor en su brazo pero no les importaba, hasta que al fin lo dejaron tirado.

Después lo subieron a un carro, cuando menos pensó se detuvo, le descubrieron el rostro y se dio cuenta que estaba frente al domicilio del Ministerio Público siendo un edificio blanco grande, donde hay una rampa larga para llegar al acceso, ya con el rostro descubierto entre cuatro lo trasladaron hasta la oficina del Ministerio Público, en el camino le iban recordando lo que tenía que decir que no se fuera a retractar porque si no, le volverían a pegar.

Al finalizar la diligencia como a las 03:00 horas, ya que pudo ver el reloj del Ministerio Público, la cual inició como a la 01:00 hora, lo sacaron de la oficina, lo subieron al mismo carro, y de nuevo le cubrieron el rostro con vendas trasladándolo a un lugar desconocido, recuerda escuchar que se abrió un portón, entraron a un lugar, subieron unas escaleras como de cuatro niveles, introduciéndolo a un cuarto esposándolo sólo de la mano izquierda permaneciendo así por el resto de la noche.

Como al mediodía del martes 14 de julio lo ingresaron a los separos de la Policía Ministerial del Estadio.

Que a pesar de su lesión no había recibido una atención médica adecuada, tan sólo se presentó ante él una mujer que dijo ser doctora revisándolo superficialmente dándose cuenta del estado de su brazo, pidiéndole le realizara algunos estudios, recibiendo como respuesta que se haría hasta que fuera consignado al penal ya que a pesar de que lo necesitaba ella no contaba con esa posibilidad.

B. Con motivo de dicha inconformidad, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos registró el expediente número **** en el que, con el objeto de contar con elementos suficientes para la debida integración del mismo, se practicaron las diligencias que a continuación se enumeran, mismas que constituyen las evidencias allegadas a la queja que hoy se resuelve.

II. EVIDENCIAS

En el presente caso las constituyen:

1. Queja interpuesta por la señora Q1 el día 15 de julio de 2009 ante esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
2. En esa misma fecha, se levantó constancia de llamada telefónica realizada al comandante de guardia de la Dirección de Policía Ministerial del Estado mediante la cual se constató que el señor V1 se encontraba detenido en dichas instalaciones.
3. Acta circunstanciada de fecha 15 de julio de 2009, en la que se hace constar que personal de esta Comisión se constituyó en los separos de la Dirección de Policía Ministerial del Estado a efecto de entrevistarse con el señor V1, quien relató la forma de cómo fue privado de su libertad por elementos de la UMIP, dándose fe de que presentaba tres pequeñas escoriaciones en su espalda, el brazo derecho con múltiples hematomas y deformación en ese mismo hombro ya que presentaba inflamación desde la articulación humeral proximal hasta la punta del dedo, además en ambas muñecas presentaba excoriaciones equimóticas de coloración rojiza.
4. Oficio número **** de 17 de julio de 2009, por el cual se solicitó al Director de Policía Ministerial del Estado, rindiera un informe en el que se precisara la hora en la que el señor V1 ingresó a los separos, nombre de los elementos que lo llevaron a esa corporación y ante qué autoridad, posteriormente, esa Dirección lo puso a disposición.

5. Con oficio número **** de 17 de julio de 2009, se solicitó al Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán, adoptara las medidas cautelares necesarias para garantizar el derecho a la protección de la salud del señor V1, en las que se incluyeran los servicios y recursos al alcance para restablecerla.

6. En esa misma fecha, mediante oficio número ****, este organismo solicitó del Coordinador de la Unidad Modelo de Investigación Policial (UMIP) un informe detallado sobre los actos que refiere la queja, en el que se haga constar los antecedentes, fundamentos y motivación de acción u omisión que reclama la señora Q1.

7. Opinión médica de fecha 17 de julio de 2009, que el personal médico de apoyo de esta Comisión realizó respecto la integridad física del señor V1.

8. Informe rendido con oficio número **** de 21 de julio de 2009, suscrito por el Coordinador General de la Unidad Modelo de Investigación Policial de la PGJE a través del cual rindió el informe solicitado.

9. Con oficio número **** de 21 de julio de 2009, el Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán, informó a este organismo que fue aceptada y decretada la medida precautoria y/o cautelar solicitada, para lo cual se instruyó al Jefe del Departamento Médico para que se practicara una exploración corporal completa y se realizaran estudios de rayos x y los que resulten necesarios al señor V1.

10. Informe rendido con oficio número **** de 21 de julio de 2009, suscrito por el Jefe del Departamento Legal de la Dirección de Policía Ministerial del Estado, a través del cual comunicó que ningún elemento de esa corporación participó en la detención del señor V1 y que el día 14 de julio de 2009 personal adscrito a la sección médica de esa Dirección le realizó el dictamen médico de lesiones.

11. Oficio número **** de fecha 17 de agosto de 2009, por el cual este organismo solicitó la colaboración del agente Segundo del Ministerio Público del fuero común Especializado en el Delito de Homicidio Doloso en esta ciudad, a fin de que remitiera copia certificada de la declaración ministerial rendida por el señor V1 ante esa agencia con motivo de su localización y/o presentación, del dictamen médico acerca de su estado psicofisiológico, así como de las diversas solicitudes y resultados de las pruebas periciales derivado de su presentación, localización y detención.

12. Acta circunstanciada de fecha 17 de agosto de 2009, en la cual se hace constar que personal de esta CEDH en varias ocasiones trató de comunicarse por teléfono con la señora Q1, para hacerle del conocimiento la respuesta emitida por las autoridades señaladas como presuntamente responsables de violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de su esposo V1 no obteniendo respuesta, ya que no contestaban mandando a buzón la llamada.

13. Con fecha 19 de agosto de 2009, mediante el oficio número ****, signado por el agente Segundo del Ministerio Público del fuero común Especializado en el Delito de Homicidio Doloso de Culiacán, remitió a este organismo la información solicitada.

14. Oficio número **** de fecha 17 de septiembre de 2009, por el cual esta Comisión solicitó la colaboración del Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán, a efecto de que informara cuáles habían sido los estudios médicos que se le practicaron al señor V1, así como el resultado de cada uno de ellos, debiendo remitir copia certificada de los mismos.

15. Acta circunstanciada de fecha 30 de septiembre de 2009, en la que se hace constar que personal de esta Comisión realizó llamada telefónica a la señora Q1 para comunicarle los informes enviados por las autoridades señaladas como presuntas responsables de violaciones a derechos humanos.

16. Mediante oficio número **** de fecha 13 de octubre de 2009, el Director de Prevención y Readaptación Social del Estado Encargado temporalmente de la Dirección del CECJUDE, informó a este organismo que se le realizó estudio médico al interno V1, consistente en radiografías de hombro y codo derecho resultando sin lesiones aparentes.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

El 13 de julio de 2009, el señor V1 alrededor de las 20:30 horas fue detenido por elementos de la Unidad Modelo de Investigación Policial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con base en una orden de localización y presentación girada por el agente Segundo del Ministerio Público del fuero común Especializado en el Delito de Homicidio Doloso en esta ciudad con motivo de la integración de la averiguación previa número ****.

Posteriormente, a las 06:55 horas del día siguiente 14 de ese mes y año le fue ejecutada una orden de detención dictada por el citado agente social, siendo remitido el 15 de julio del mismo año al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en esta ciudad.

En esta última fecha, personal de esta Comisión Estatal se constituyó en los separos de la Dirección de Policía Ministerial del Estado, haciendo constar que el señor V1 presentaba en su brazo derecho múltiples hematomas, deformación del hombro de ese lado, así como inflamación desde la articulación humeral proximal hasta la punta de sus dedos, lo cual quedó acreditado con los correspondientes dictámenes elaborado por el médico que apoya con sus servicios a esta Comisión Estatal, así como por el médico cirujano adscrito a dicha Dirección.

IV. OBSERVACIONES

Del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente de queja número ****, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos precisa que de la investigación realizada se lograron recabar diversas evidencias de las que se advierten violaciones a los derechos humanos a la integridad y seguridad personal consistentes en la especie en trato cruel, inhumano o degradante, así como el derecho a la protección de la salud, en que incurrieron los elementos de la Unidad Modelo de Investigación Policial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en agravio del señor V1.

A. Violación al derecho a la integridad y seguridad personal.

El derecho a la integridad y seguridad personal se define como el derecho que tiene toda persona a no sufrir transformaciones nocivas en su estructura corporal, sea fisionómica, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente que cause dolor o sufrimiento graves, con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero.

Ello implica un derecho subjetivo consistente en la satisfacción de la expectativa de no sufrir alteraciones nocivas en la estructura psíquica y física del individuo, en contrapartida consiste en la obligación de las autoridades de abstenerse a la realización de conductas que produzcan dichas alteraciones.

a) Trato cruel, inhumano o degradante

Cualquier acción que tenga como resultado una alteración de la salud o deje huella material en el cuerpo realizada directamente por un servidor público en el ejercicio de sus funciones en perjuicio de una persona constituye violaciones a derechos humanos a la integridad y seguridad personal en la especie en trato cruel, inhumano o degradante.

En el caso que nos ocupa se cuenta con el dicho del quejoso al señalar ante personal de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos que el día 13 de

julio de 2009 alrededor de las 20:30 horas fue interceptado por varios sujetos desconocidos cuando conducía un camión urbano de la ruta ****, quienes lo esposaron y después lo subieron a una camioneta ****.

También, obra constancia levantada por personal de este organismo de fecha 15 de julio de 2009 en la que se asentó que el señor V1 presentó tres pequeñas excoriaciones en su espalda, múltiples hematomas en su brazo derecho, deformación en el hombro derecho, así como inflamación desde la articulación humeral proximal hasta la punta de los dedos.

De igual manera se cuenta con la opinión médica elaborado por personal adscrito a la Sección Médica de la Dirección de Policía Ministerial del Estado, en el que se dictaminó lo siguiente:

“Paciente el cual refiere dolor en hombro derecho con irradiación a codo del mismo lado secundario a luxación de dos días de evolución y el cual fue reducido por personas que no son médicos en el momento de la luxación.

A la exploración física se observa: inflamación en hombro y codo derecho con intenso dolor a la palpación media y profunda que lo incapacita al movimiento, también refiere dolor en toda el área del abdomen, pero no se observa ninguna lesión, niega toxicomanías.

Nota: el paciente requiere valoración por traumatólogo para la realización de estudios de gabinete, se le administra analgésicos y antiinflamatorios”.

Al momento de rendir su declaración ministerial ante el agente del Ministerio Público del fuero común Especializado en el Delito de Homicidio Doloso en esta ciudad, el agente del Ministerio Público actuante a solicitud del defensor oficial dio fe de que el señor V1 refería dolor en la espalda y estómago.

Dichas diligencias se concatenan con el dictamen médico provisional de lesiones que le fue practicado al señor V1 por personal de la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la PGJE de fecha 14 de julio de 2009, del cual obra copia certificada en autos que componen el presente expediente, a través del cual se dictaminó lo siguiente:

“Como lesiones externas presenta: tres equimosis vinosas producidas por mecanismo de contusión, interesando tejido graso subcutáneo, localizadas, una, en la región pectoral izquierda, midiendo dos punto cinco por un centímetros; y, dos, en la región dorsal derecha del tórax, midiendo tres por dos centímetros y dos punto cinco por un punto cinco centímetros”

De igual forma corre agregado como evidencia la opinión médica elaborada por el médico que apoya con sus servicios profesionales a esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en el que dictaminó lo siguiente:

“- De acuerdo con examen físico que se le practicó al C. V1. Si se encontraron lesiones en su integridad física.

- A través de la descripción de la lesión: Tipo de lesión, dimensiones, localización anatómica de ésta nos corroboran que estas lesiones en la integridad anatómica de C. V1. Si están en relación a los hechos señalados recientemente en tiempo y forma por el proceso de sanidad actual de las lesiones.

- Se solicita practicar paraclínicos radiológicos y evaluación por facultativo (traumatología y Neurología).

- La Clasificación médico legal previa:

Estas lesiones tienen una antigüedad de aproximadamente 48 a 72 horas y son de las que tardan en sanar más de 15 días. Debido a la ruptura de ligamentos en la articulación escapulo humeral y al no poder precisar todavía el daño al tejido vasculo nervioso ya que la reducción de la luxación fue empírica.

Por su gravedad: estas lesiones no ponen en peligro la vida.”

En ese sentido, el dicho del señor V1, la constancia levantada por personal de este organismo de fecha 15 de julio de 2009, fe de lesiones dadas por el agente del Ministerio Público, dictámenes médicos de lesiones elaborados por personal de la Sección Médica de la Dirección de Policía Ministerial del Estado, por personal de la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales y por el médico que apoya con sus servicios profesionales a esta Comisión Estatal, son más que suficientes para afirmar, sin ninguna duda ni reticencia, que el quejoso presentó lesiones en su integridad física.

Es decir, son más que evidentes las lesiones descritas en la superficie corporal del quejoso destacando la irradiación del codo de su brazo derecho secundario a luxación que lo incapacitaba al movimiento.

Ahora bien, las lesiones que expresa le fueron inferidas, son coincidentes primero con las lesiones que él dice le propinaron en su cuerpo y segundo, con la temporalidad en que refiere le fueron inferidas después de las 20:30 horas del día 13 de julio de 2009 y las primeras horas del día 14 de ese mes y año.

Dicho lo anterior, es dable inferir que tal como lo señala el señor V1 fue objeto de malos tratos por parte de los elementos de la Unidad Modelo de Investigación Policial UMIP de la PGJE que llevaron a cabo su localización y/o presentación.

A lo anterior, se le agrega el oficio número **** recibido el 22 de julio de 2009 signado por el Jefe del Departamento Legal de Policía Ministerial del cual se desprende que a las 07:30 horas aproximadamente, del día 14 de ese mes y año el señor V1 fue internado en los separos de esa corporación en calidad de detenido por agentes de la Unidad Modelo de Investigación Policial.

Las mencionadas probanzas se enlazan con el informe rendido mediante oficio número **** de fecha 21 de julio de 2009, por el Coordinador General de la Unidad Modelo de Investigación Policial, en el que acepta que el señor V1 fue detenido por elementos a su cargo el 14 de julio de 2009, con sustento en una orden de detención girada por el agente del Ministerio Público del fuero común Especializado en el Delito de Homicidio Doloso en esta ciudad y con motivo de la integración de la averiguación previa **** por lo que previamente se le había ejecutado una orden de localización y/o presentación con motivo de las investigaciones realizadas en la mencionada indagatoria.

A dicho informe, agregó copia certificada del parte informativo elaborado por elementos a su cargo del que se advierte de manera expresa las circunstancias en que fue localizado el quejoso para dar cumplimiento a dichas órdenes ministeriales.

Del contenido de dichos partes informativos llama la atención que en ninguno de ellos se menciona algún roce, choque o fricción que hayan tenido los agentes aprehensores al momento de dar cumplimiento a los referidos mandamientos ministeriales, se infiere que tales actos se llevaron a cabo sin ningún contratiempo que justificara las lesiones que sufrió el señor V1, toda vez que en dichos partes informativos se precisa la buena disposición del activo del delito para acompañarlos ante el fiscal que lo estaba requiriendo.

Circunstancia que llama poderosamente la atención a este organismo, pues de haberse desarrollado la localización y/o presentación y posteriormente detención del agraviado en los términos en que lo asentaron en los respectivos partes informativos, el hoy quejoso no tenía por qué haber presentado lesiones en su superficie corporal.

De igual manera, constituye evidencia para esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el hecho de que dichos partes informativos tampoco refieren

que al momento de ejecutar los mandamientos ministeriales, el señor V1 ya se encontraba lesionado.

Al respecto, es importante señalar que esta CEDH no se opone a la investigación y persecución de los delitos por parte de las autoridades competentes; por el contrario hace patente la necesidad de que el Estado a través de sus instituciones públicas cumpla con su deber jurídico de investigar con los medios a su alcance los ilícitos que se cometan en el ámbito de su competencia, a fin de identificar a los responsables y lograr que se les impongan las sanciones pertinentes, así como de evitar que los elementos que se encargan de las investigaciones de un delito, utilicen durante el desarrollo de las mismas, acciones ilegales como método de investigación, ya que por un lado se atenta contra los derechos humanos y por otro se nulifica el estado de Derecho.

Con base en lo anterior se sostiene por este organismo, que si el señor V1 aparece lesionado, fue a consecuencia de los golpes que le infirieron los elementos de la Unidad Modelo de Investigación Policial; por lo que de acuerdo al parte informativo de su presentación y/o localización, fueron los agentes A1, A2 y A3.

Lo expresado para las autoridades de procuración de justicia, en específico de la Procuraduría General de Justicia del Estado, debe ser motivo de gran preocupación porque los servidores públicos involucrados corresponden a Unidades Especializadas; tal es el caso de la Unidad Modelo de Investigación Policial, de quienes se supone han recibido una capacitación especial para efecto de ingresar a formar parte de esas Unidades con el propósito de realizar investigaciones científicas para el esclarecimiento de los hechos delictuosos que son de su conocimiento.

Diversas legislaciones internacionales se pronuncian en contra de cualquier acto que ponga en riesgo la integridad personal de los gobernados, tal es el caso de:

- Declaración Universal de Derechos Humanos en sus artículos 3° y 5°;
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus numerales 5.1 y 5.2;
- Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su numerario 7°; y,
- Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en sus artículos 2° y 7° que establecen:

Declaración Universal de los Derechos Humanos:

“Artículo 3. Todo Individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

.....
Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.”
.....

Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José):

“Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”
.....

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

“Artículo 7. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular nadie será sometido sin su libre consentimiento o experimentos médicos o científicos.”
.....

Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar La Tortura:

“Artículo 2. Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.”
.....

Artículo 7. Los Estados partes tomarán medidas para que, en el adiestramiento de agentes de la policía y de otros funcionarios públicos responsables de la custodia de las personas privadas de su libertad, provisional o definitivamente, en los interrogatorios, detenciones o arrestos, se ponga especial énfasis en la prohibición del empleo de la tortura.

Igualmente, los Estados partes tomarán medidas similares para evitar otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.”

.....

Con tal proceder, los servidores públicos involucrados se apartan de lo que establece el Instructivo para la Realización de las Funciones Específicas de la Policía Ministerial, que en sus artículos 12 y 14, establecen respectivamente lo siguiente:

“Artículo 12. En todo cumplimiento de órdenes de investigación emitidas por el Ministerio Público, así como en el traslado de las personas en quienes recaiga, ante la autoridad respectiva, los agentes intervinientes en la investigación de delitos, sujetarán su conducta al respeto y garantía irrestrictos para aquellas en sus derechos humanos, constitucionales y legales, y les proporcionarán un trato digno y humano, quedando proscrito cualquier maltrato o violencia innecesarias:

.....

Artículo 14. El objetivo de la investigación de delitos, es el cumplimiento constitucional, legal, pronto, eficaz y eficiente, de los mandatos ministeriales y todas las actividades inherentes para la investigación de los hechos delictivos, a los fines de su esclarecimiento y la determinación de los responsables de su comisión.”

Como se advierte, el proceder de los servidores públicos fue totalmente contrario a Derecho, pues además de los preceptos legales e instrumentos internacionales mencionados con anterioridad, pasaron por alto un mandamiento especial, como lo es el Instructivo para la Realización de las Funciones Específicas de la Policía Ministerial del Estado, que establece, “*que en ninguna circunstancia el agente inflingirá tortura, violencias o trato cruel al sujeto aprehendido*”; así también, el Código de Ética de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, que en términos generales expone:

“en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los servidores públicos deben salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de su conductas, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éstos, absteniéndose de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público”.

A su vez, el Manual de Organización, Funcionamiento y Procedimientos para la Policía Judicial (Ministerial) del Estado, en sus puntos 3.3.4.6.6, 4.0.1.2, 4.0.1.2.1, 4.0.1.2.3, 4.0.1.2.5, 4.0.1.3, 4.0.1.5 y 4.0.1.7, establecen:

“3.3.4.6.6. La Ejecución de las órdenes de investigación de delitos así como las de presentación y detención, se realizarán por el personal específicamente asignado e instruido para cada caso y el cual actuará debidamente identificado con sus credenciales oficiales, se ajustarán a los términos fijados por el Ministerio Público en la orden respectiva. Al efectuarlas deberá otorgarse a las personas en que recaigan, un trato respetuoso de la dignidad humana y evitando la violencia innecesaria...”

.....

“4.0.1.2. El desarrollo de las actividades que comprende la función de la Policía Judicial se realizará conforme a los principios siguientes:

“4.0.1.2.1. Legalidad;

.....

“4.0.1.2.3. Respeto a los derechos ciudadanos;

.....

“4.0.1.2.5. Profesionalismo;

.....

“4.0.1.3. El principio de legalidad implica que el personal de la Policía Judicial cumplirá su función con estricto apego a las disposiciones legales que la rigen.

.....

“4.0.1.5. El principio de respeto a los derechos ciudadanos consiste en que los elementos de la Policía Judicial atenderán a las personas con que tengan relación en el ejercicio de su función, con pleno acatamiento a los derechos que e su favor reconocen la Constitución y las leyes.

.....

“4.0.1.7. El principio de profesionalismo se entenderá como el empleo responsable de los medios que la técnica policial y que la ley otorgan a los integrantes de la Policía Judicial.”

b) Derecho a la protección de la salud de las personas detenidas

Es el derecho que tiene todo ser humano a disfrutar de un funcionamiento fisiológico óptimo, implica una permisión para el titular, quien tiene la libertad de acceder a los servicios de asistencia médica.

La prestación indebida del servicio se entiende como cualquier acto u omisión que cause la negativa, suspensión, retraso o deficiencia de un servicio público de parte de un servidor público que implique el ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.

En cuanto al acto implica la conducta de un servidor público que niegue, impida o interfiera en la posibilidad del individuo de acceder a los servicios de salud o bien una conducta por parte de la autoridad que implique el incumplimiento de la obligación a cargo del Estado de proveer de la infraestructura normativa acorde para la protección, preservación y promoción de la salud

En ese contexto a juicio de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos los supuestos mencionados en el párrafo precedente se encuentran plenamente satisfechos en el caso en estudio.

Ya que se cuenta con el señalamiento formulado por la quejosa la señora Q1 al informar que cuando miró a su esposo en los separos de la Policía Ministerial le dijo que lo estaban acusando de homicidio y que lo habían golpeado mucho, que traía el brazo lastimado, que lo revisó una doctora, misma que le dijo que necesitaba unas radiografías, pero que no se las podía sacar hasta que lo consignaran.

Por su parte, el señor V1 al ser entrevistado por personal de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos el día 15 de julio de 2009 señaló que a pesar de su lesión hasta ese momento no recibía atención médica adecuada, ya que tan sólo se había presentado una doctora que lo revisó superficialmente dándose cuenta del estado de su brazo, a quien le pidió le realizara unos estudios recibiendo como respuesta que hasta que fuera consignado al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en esta ciudad, debido a que aunque sí lo necesitaba, ellos no contaban con esa posibilidad.

Cabe mencionar que la lesión de la que se dolía el agraviado era la provocada en su hombro derecho, ya que presentaba una luxación, lo que se acredita con el dictamen médico elaborado por profesional de la salud adscrito a la Dirección de Policía Ministerial del Estado y por médico que apoya con sus servicios profesionales a este organismo.

Al respecto, es importante mencionar que la detención es una medida cautelar sobre las personas que puede ser adoptada por la autoridad judicial, las autoridades o agentes de la Policía Ministerial.

En sí constituye un deber para los funcionarios que les impone la obligación de proporcionarle una adecuada atención médica; al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la atención médica deficiente de un detenido es violatoria del artículo 5° de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Como una constante a sus sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que las personas privadas de su libertad cuentan con derecho a una adecuada atención médica; la falta de dicha atención, implica la violación al derecho a la integridad personal.

En ese sentido, dicha Corte considera que el Estado tiene la obligación de ofrecer atención médica a todas las personas detenidas o bajo custodia estatal, quienes asimismo tienen el derecho de elegir el profesional que los atienda y, a su vez, los resultados de cualquier evaluación médica a la que fueren sometidos los detenidos deben llegar a manos del Juez conocedor de la causa, del detenido y de su abogado defensor.

En ese tenor, los Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión de las Naciones Unidas, establece: *“Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. Esa atención y ese tratamiento serán gratuitos.”*

A manera de ilustración la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el caso denominado “Retén de Catia”, analizó entre muchos otros aspectos la falta de tratamiento médico de los internos, incluso luego del conflicto ocurrido en 1992 que produjo muertes, desapariciones y una gran cantidad de heridos, a los ojos de la Corte la falta de atención médica constituyó una violación a la integridad física de los detenidos en el Retén de Catia, impidiendo que sus vidas se desarrollaran en condiciones dignas y generalizando una serie de enfermedades graves.

En ese sentido reiteró el derecho que asiste a los detenidos de elegir un médico que los atienda, lo que no implica que se cumpla con cualquier solicitud, pero sí la importancia de un profesional que no esté vinculado con el servicio penitenciario o la policía para evitar que se encubran malos tratos o torturas.

Por otra parte, el derecho al reconocimiento médico es exigible sólo en situación de detención, de ahí que no puede ser modificado, limitado o condicionado y surge desde el momento en que se practica la detención; es decir, en el instante en que se priva de la libertad deambulatoria a una persona, por ende paralelamente al nacimiento del derecho, nace igualmente la obligación de la autoridad a cuya disposición se encuentre el detenido de posibilitar el pleno ejercicio del mismo.

Hechas las anteriores consideraciones, no escapa para este organismo el hecho de que al señor V1, cuando se encontraba detenido en los separos de la Policía Ministerial del Estado, fue atendido por médico de la sección respectiva de esa corporación, quien en ese momento dictaminó las lesiones que presentaba.

Ciertamente es de reconocerse que ello es un avance que se ha logrado en las corporaciones policíacas; sin embargo, no es suficiente para garantizar la plena protección de la salud de las personas que en ese instante presentan alteraciones en su integridad física, sino ir más allá, darle un mayor seguimiento al ordenar los estudios que sean necesarios para restablecer su salud, independientemente de los estudios que sean sometidos al momento de ingresar a un centro penitenciario.

Ello sería de vital importancia, ya que por un lado daría mayor certeza jurídica a un proceso penal pues se evitaría las conocidas prácticas defensistas de los indiciados y de sus abogados particulares con el propósito de sembrar la duda en el juzgador y de esa manera obtener algún beneficio para ser exonerados del ilícito que se le atribuye; y por otra parte, también se evidenciaría cualquier abuso excesivo de las atribuciones legales que le son conferidas a los servidores públicos involucrados que daría la pauta para que fueran investigados y sancionados.

En ese sentido va encaminada la presente observación, toda vez que en el caso que nos ocupa era evidente las lesiones que presentaba el señor V1, mismas que en su oportunidad no fueron atendidas debidamente sino que fue hasta su remisión al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en esta ciudad, una vez que este organismo dictó medidas cautelares a fin de garantizar el derecho a la protección de la salud.

Observación la anterior que debe ser compartida para el personal de los separos de la Policía Ministerial del Estado, pero también con mayor énfasis para los elementos de la Unidad Modelo de Investigación Policial ya que de antemano sabían las lesiones que el agraviado tenía y si no lo hicieron fue para efecto de ocultar un acto abusivo y arbitrario de su parte que contraviene los principios de legalidad, respeto a los derechos ciudadanos y profesionalismo que señala el

Manual de Organización, Funcionamiento y Procedimientos de la Policía Judicial (Ministerial) del Estado, ya descritos en el cuerpo del presente razonamiento.

En ese mismo contexto, los Principios de Ética aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes adoptada por la Asamblea General de la ONU en la Resolución 37/194 de fecha 18 de diciembre de 1982, establece que el personal de salud especialmente los médicos encargados de la atención médica de personas presas o detenidas, tienen el deber de brindar protección a la salud física y mental de dichas personas y de tratar sus enfermedades al mismo nivel de calidad que brindan a las personas que no están presas o detenidas.

En otras palabras, no es suficiente el hecho de que los médicos que se encuentren adscritos en lugares de detención solamente se dediquen a revisar la superficie corporal de las personas detenidas, sino también de acuerdo a dichos Principios Éticos es necesario que se le proporcione una atención más integral; es decir, si alguna persona requiere que se le realicen otros estudios para efecto de que se le garantice su salud, tendrá la obligación de hacerlo, debido a que el ser omiso en ello pueden incurrir en actos que constituyan participación o complicidad en torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, al respecto dichos Principios establecen:

“PRINCIPIO 1. El personal de salud, especialmente los médicos, encargados de la atención médica de personas presas o detenidas tiene el deber de brindar protección a la salud física y mental de dichas personas y de tratar sus enfermedades al mismo nivel de calidad que brindan a las personas que no están presas o detenidas.

PRINCIPIO 2. Constituye una violación patente de la ética médica, así como un delito con arreglo a los instrumentos internacionales aplicables, la participación activa o pasiva del personal de salud, en particular de los médicos, en actos que constituyan participación o complicidad en torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incitación a ello, o intento de cometerlos.”

Con tal proceder, se infiere que los elementos de la Unidad Modelo de Investigación Policial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al desplegar la conducta señalada en el transcurso del presente razonamiento en agravio del señor V1, han incumplido diversas legislaciones, tales como el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 12.1; la Declaración Universal de Derechos Humanos en sus artículos 25.1;

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su numeral XI;10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6° del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y 26 del Conjunto de Principios de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención, que establecen:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Artículo 4°. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general...”

.....

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

“Artículo 12

1. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

.....

Declaración Universal de Derechos Humanos:

“Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud...”

.....

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:

.....

“XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.”

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”.

“Artículo 10. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.

.....

XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.”

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

“Artículo 6°. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise:

A) La “atención médica”, que se refiere a los servicios que presta cualquier tipo de personal médico, incluidos los médicos en ejercicio inscritos en el colegio respectivo y el personal paramédico, se proporcionará cuando se necesite o solicite.

B) Si bien es probable que el personal médico está adscrito a los órganos de cumplimiento de la ley, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben tener en cuenta la opinión de ese personal cuando recomiende que se dé a la persona en custodia el tratamiento apropiado por medio de personal médico no adscrito a los órganos de cumplimiento de la ley o en consulta con él.

C) Se entiende que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley proporcionarán también atención médica a las víctimas de una violación de la ley o de un accidente ocurrido en el curso de una violación de la ley.”

Conjunto de Principios de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención.

“Principio 26. Quedará debida constancia en registros del hecho de que una persona detenida o presa ha sido sometida a un examen médico, del nombre del médico y de los resultados de dicho examen. Se garantizará el acceso a esos registros. Las modalidades a tal efecto serán conformes a las normas pertinentes del derecho interno.”

Por su parte la Ley General de Salud en su artículo 2° fracción I y 27, fracción III, establecen:

“Artículo 2º. El derecho a la protección de la salud tiene las siguientes finalidades:

I. El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades.

.....

Artículo 27. Para los efectos del derecho de la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

.....

III. La atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.”

.....

Ordenamientos los antes invocados que implican una permisión para el titular de tener el derecho y la libertad de acceder a los servicios de asistencia medica y, con respecto a los servidores públicos, impone la obligación de no interferir o impedir el acceso a dicho servicio en los términos legales.

Con base en lo anterior es pertinente se inicie el procedimiento administrativo disciplinario y de investigación por parte del Órgano de Control Interno de la Procuraduría General de Justicia del Estado, conforme a lo dispuesto por su Ley Orgánica, así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, a efecto de que se dé seguimiento al presente caso, se aporten los elementos que den lugar al esclarecimiento de los hechos y en su oportunidad, se impongan algunas de las sanciones que contemplan dichos ordenamientos jurídicos.

En concordancia con lo antes expuesto, se considera que la responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia de los actos u omisiones en que incurren en el desempeño de sus atribuciones que contempla la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, o en su caso la Ley Orgánica del Ministerio Público, debido a que el consentir tales actos es como dejar impunes prácticas contrarias a la legalidad, honradez, imparcialidad, eficiencia y lealtad que garantizan el éxito del buen servicio público.

Al respecto, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, en sus numerales 46 y 47 fracciones I y XIX, a la letra dicen:

“Artículo 46. Los servidores públicos deben salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

“Artículo 47. Para el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley, los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones:

“I. Cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión.

.....

“XIX. Abstenerse de todo acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público.”

.....

En ese sentido, la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, señala:

“Artículo 71. Además de las señaladas por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, son obligaciones, y su incumplimiento será causa de responsabilidad de los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común, de los Agentes de Policía Ministerial del Estado y de los Peritos al servicio de la Procuraduría General de Justicia, las siguientes:

I. Conducirse en su función con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos;

II. Practicar las diligencias necesarias en cada caso;

.....

Ordenamientos de los que se desprende la obligatoriedad que tienen los servidores públicos de conducirse en el desempeño de sus funciones con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y respeto a los derechos humanos y, en contrapartida, el actuar fuera de estos supuestos necesariamente implica un exceso o deficiencia del empleo, cargo o comisión encomendado, el cual deberá ser sujeto del inicio de una investigación administrativa de parte del órgano de control interno de la institución respectiva.

Por otra parte, el solicitar a las autoridades involucradas el inicio de un procedimiento administrativo en contra de servidores públicos a quienes se les considera han incumplido en actos u omisiones, es independiente y autónomo del político, del penal y del civil a que pudiera dar lugar una sola conducta ilícita cometida por un servidor público debido a que la naturaleza de la responsabilidad administrativa tiene como objetivo preservar el correcto y

eficiente servicio público, que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones

En ese sentido, se citan las siguientes tesis jurisprudenciales por considerar que tienen relación con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen la función de todo servidor público.

“Novena Época

Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XVII, Marzo de 2003

Tesis: I.4o.A.383 A

Página: 1769

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO. La responsabilidad administrativa de los

servidores públicos surge como consecuencia de los actos u omisiones -que se definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento del funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por las que se contemplan en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría que el ordenamiento jurídico respectivo no previera las obligaciones o deberes que a cada funcionario le corresponden, para dejar impunes prácticas contrarias a la legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia que orientan a la administración pública y que garantizan el buen servicio público, bajo el principio unitario de coherencia entre la actuación de los servidores públicos y los valores constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato de deberes generales y la exigibilidad activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, en su artículo 109, fracción III, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, lo que constriñe a todo servidor público a acatar y observar el contexto general de disposiciones legales que normen y orienten su conducta, a fin de salvaguardar los principios que la propia Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado de derecho, pues la apreciación de faltas implica constatar la conducta con las normas propias o estatutos que rigen la prestación del servicio público y la relación laboral y administrativa entre el servidor público y el Estado.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión fiscal 316/2002. Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 29 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.”

“Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XVI, Octubre de 2002

Tesis: 2a. CXXVI/2002

Página: 475

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 109 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, CON MOTIVO DE LA INVESTIGACIÓN DE CONDUCTAS U OMISIONES QUE PUEDAN CONSTITUIRLAS. El artículo 109 constitucional contiene diversos principios, a saber: que el procedimiento de responsabilidad administrativa es independiente y autónomo del político, del penal y del civil a que pudiera dar lugar una sola conducta ilícita cometida por un servidor público; que la naturaleza de la responsabilidad administrativa tiene como objetivo preservar el correcto y eficiente servicio público, según se lee de su fracción III que señala que se sancionarán los actos u omisiones de los servidores públicos "... que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. ..."; que la autonomía del procedimiento, en concordancia con la propia naturaleza de la responsabilidad administrativa, conlleva a determinar que la sanción también es administrativa y, por ende, que la sustanciación de ese procedimiento y la imposición de la sanción corresponden al superior jerárquico del servidor público infractor; finalmente, que la potestad del superior jerárquico para castigar faltas disciplinarias de los servidores públicos, regulada en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, acoge el sistema que reconoce a la administración esta potestad doméstica, derivada de la función de autotutela que le permite sancionar faltas de sus miembros e, incluso, expulsarlos cuando su permanencia es incompatible con aquella.

Amparo en revisión 301/2001. Sergio Alberto Zepeda Gálvez. 16 de agosto de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Oliva Escudero Contreras.

“Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: X, Agosto de 1999

Tesis: IV.1o.A.T.16.A

Página: 799

SERVIDOR PÚBLICO, LA RESPONSABILIDAD DEL, TIENE DIVERSOS ÁMBITOS LEGALES DE APLICACIÓN (ADMINISTRATIVA, LABORAL, POLÍTICA, PENAL, CIVIL). El vínculo existente entre el servidor público y el Estado, acorde al sistema constitucional y legal que lo rige, involucra una diversidad de aspectos jurídicos en sus relaciones, entre los que destacan ámbitos legales de naturaleza distinta, como son el laboral, en su carácter de trabajador, dado que efectúa una especial prestación de servicios de forma subordinada, el administrativo, en cuanto a que el desarrollo de su labor implica el de una función pública, ocasionalmente el político cuando así está previsto acorde a la investidura, y además el penal y el civil, pues como ente (persona), sujeto de derechos y obligaciones debe responder de las conductas que le son atribuibles, de manera que al servidor público le pueda resultar responsabilidad desde el punto vista administrativo, penal, civil e inclusive político en los supuestos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la Constitución Local correspondiente y así mismo la laboral, y por lo tanto, no se incurre en la imposición de una doble sanción cuando estas, aunque tienen su origen en una misma conducta, sin embargo tienen su fundamento y sustento en legislación de distinta materia (administrativa, laboral, penal, etc.).”

Por todo lo expuesto, y al tener como marco el artículo 1º de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que precisa como objetivo último en nuestra entidad federativa la protección de la dignidad humana y la promoción de los derechos fundamentales que le son inherentes, así como al artículo 4º Bis, segundo párrafo, que afirma que los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculación a todos los poderes públicos, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa de manera respetuosa se permite formular a usted, señor Procurador General de Justicia del Estado, las siguientes:

VI. RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Instruya a quien corresponda para que al tomar en cuenta los actos motivo de la queja, así como los razonamientos expuestos por esta Comisión, tramite el procedimiento correspondiente de conformidad con lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, a fin de que se impongan las sanciones que resulten procedentes a los CC. A1, A2 y A3, elementos de la Unidad Modelo de Investigación Policial y/o a quienes resulten responsables por la comisión de los hechos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDA. Se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda a fin de que se garantice el derecho a la protección de la salud de toda persona que ingrese a los separos de la Dirección de Policía Ministerial del Estado, ya sea por que se le haya detenido en flagrancia, se le haya ejecutado una orden de aprehensión o una orden de presentación y/o localización o, en su caso detención, la cual no deberá circunscribirse en la simple revisión médica sino ampliarse con aquellos estudios que resulten necesarios para restablecer su salud por completo.

TERCERA. Realicen las acciones inmediatas para que el personal de la Unidad Modelo de Investigación Policial, sean instruidos y capacitados respecto de la conducta que deben observar a fin de respetar los derechos humanos de las personas en el desempeño de sus funciones.

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental, tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera otra autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

Notifíquese al licenciado Alfredo Higuera Bernal, Procurador General de Justicia del Estado, de la presente Recomendación, misma que en los archivos de esta Comisión quedó registrada bajo el número 10/2010, debiendo remitírseles con el oficio de notificación correspondiente, una versión de la misma con firma autógrafa del infrascrito.

Que de conformidad con lo estatuido por el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dentro de un plazo de cinco días hábiles computable a partir del día hábil siguiente de aquél en que se haga la notificación respectiva, manifieste a esta Comisión si acepta la presente Recomendación, solicitándosele expresamente que en caso negativo, motive y fundamente debidamente la no aceptación; esto es, que exponga una a una sus contra argumentaciones, de modo tal que se demuestre que los razonamientos expuestos por esta Comisión carecen de sustento, adolecen de congruencia o, por cualquiera otra razón, resulten inatendibles.

Todo ello en función de la obligación de todos de observar las leyes y específicamente, de su protesta de guardar la Constitución, lo mismo la General de la República que la del Estado así como las leyes emanadas de una y de otra.

Ahora bien, en caso de aceptación de la misma, deberá entregar dentro de los cinco días siguientes las pruebas correspondientes a su cumplimiento.

La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la presente Recomendación no fue aceptada, por lo que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública precisamente esa circunstancia.

Notifíquese a la señora Q1, en su calidad de quejosa, de la presente Recomendación, remitiéndole con el oficio respectivo, un ejemplar de esta resolución con firma autógrafa del infrascrito para su conocimiento y efectos legales procedentes.

EL PRESIDENTE

DR. JUAN JOSÉ RÍOS ESTAVILLO